

El asesinato político en la América Latina del siglo XX.

Autor Percy Francisco Alvarado Godoy
Sunday, 01 de January de 2012

Una parte considerable de nuestras naciones latinoamericanas padecieron durante los últimos tiempos un permanente desangramiento sin parangón en su historia, motivado por la profundización de la violencia y los conflictos internos. Las causas, en muchos casos aún latentes, fueron las graves condiciones de desigualdad y un incremento de la injusticia social.

Las endeble democracias de América Latina, impuestas mediante elecciones plagadas de corruptelas, o bajo la anuencia y presiones de la Casa Blanca, resultaron ineficaces para controlar sus respectivos países. Washington encontró en las cúpulas castrenses la aparente solución: la dictadura militar. De esta forma, el poder castrense fue entronizándose en las naciones del continente: primero en Paraguay (1954); luego en Brasil (1964); y, posteriormente, en otras naciones del Cono Sur como Perú (1968), Uruguay (1972), Chile (1973), Argentina (1976) y Bolivia.

La macabra época de los generalatos, torturas y desapariciones, protagonizadas por hombres sin escrúpulos como Alfredo Stroessner, Rafael Videla, Augusto Pinochet, Hugo Banzer y el no menos cruel, aunque civil, José María Bordaberry, golpeó a los mejores hijos de Latinoamérica. Era tal la dependencia y la sumisión a Washington, que varios gobiernos, en apariencia democráticos, optaron por recurrir al patrocinio militar para enfrentar los justos reclamos populares. Así sucedió en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras.

La ideología de los generales, influida notablemente por el fascismo y las doctrinas de la ultraderecha conservadora norteamericana, tenía el doble propósito de detener, por un lado, a la legítima lucha de los pueblos y, por otro, incrementar los niveles de dependencia al capital extranjero. Toda esta amalgama ideológica, sustentada por la doctrina de la Seguridad Nacional, descansaba en la defensa a ultranza del desarrollo de un capitalismo dependiente al capital foráneo y de las estrategias de desarrollo diseñadas por técnicos norteamericanos, así como en la represión y estigmatización de quienes propusieran otras alternativas de progreso. El ejemplo cubano fue excomulgado, censurado y perseguido, así como aquellos que le defendían como alternativa más viable para sus países.

Fue una época oscura que solo vale ser recordada para el reclamo de justicia y para evitar que se repita. Las dictaduras castrenses se extendieron por largos años en varias naciones del continente, a pesar de la condena internacional a las mismas. La dictadura de Stroessner en Paraguay duró desde 1954 hasta 1991; el régimen de Pinochet en Chile se alargó desde 1973 hasta 1990; la Argentina padeció a Videla, Viola y Galtieri desde 1976 hasta 1982; mientras en Uruguay los gobiernos represores de Jorge Pacheco Areco y José María Bordaberry se extendieron desde 1966 hasta 1985. Este mismo panorama aterrador lo sufrieron otras naciones del continente como Bolivia, Guatemala y otras.

El mal impuesto a nuestras naciones, aunque no fue eterno, fue desastroso. La humanidad entera se conmocionó ante tanto crimen y tanta injusticia. Fueron largos años de reclamo, de denuncia, de combate y oposición, los que dieron al traste con esta página negra de nuestra historia. Muchas fueron las causas de su desaparición, pero la más válida fueron la resistencia denodada de los mejores hijos de nuestros pueblos y la creciente solidaridad del mundo hacia su lucha heroica. Influyeron también el desprestigio de estos regímenes a causa de la corrupción y su criminalidad, las contradicciones internas dentro de los mismos y la lucha de poder, el fracaso de los modelos económicos defendidos por ellos mediante el terror y, sobre todo, la pérdida del miedo por parte de los pueblos.

Mucho se trató de hacer por ocultar tanto crimen. Los culpables de las torturas, asesinatos y desapariciones, recurrieron a diversas artimañas para escapar del justo reclamo de justicia por parte de sus víctimas y familiares. Sin embargo, ni el olvido, ni la complacencia, pueden resguardar y perdonar al crimen y a la impunidad.

¿Qué quedó, sin embargo, como huella amarga de esta nefasta experiencia?

Miles de los mejores hijos de Latinoamérica fueron asesinados salvajemente, arrancados de sus hogares en las sombras de la noche y sus cuerpos desaparecidos para siempre. El dolor late, permanece y no quiere perdonarse. La Argentina

Aún hoy, en Argentina, por ejemplo, se recuerda con dolor tanta injusticia. Las Fuerzas Armadas fueron las responsables directas de la violación de los derechos humanos de millares de ciudadanos los que, mediante el empleo de técnicas sofisticadas de tortura, tomadas de la experiencia nazi y de los manuales de contrainsurgencia de la CIA y de las fuerzas armadas norteamericanas, fueron ejecutados, mutilados, torturados y, finalmente, desaparecidos. 30,000 fue el escalofriante número de personas desaparecidas y asesinadas por la represión castrense en esta guerra sucia. Puede decirse, sin temor al equívoco, que casi toda una generación de argentinos fue víctima de esta atrocidad. El hecho de que el 80 % de los asesinados y desaparecidos tuviera entre 21 y 35 años de edad, así lo confirma.

Hoy, se descubren los embrollos de esa trama bestial y reprobable. Los militares argentinos llegaron a contar con 340

centros clandestinos de tortura y detención, cuyos operadores eran represores castrenses.

El terrible aparato represivo de los militares argentinos contó con el apoyo y la complicidad de civiles miembros de instituciones religiosas, legales y de otro tipo. Baste ejemplificar esto con la denuncia de la CONADEP, la cual publicó una extensa lista de 1351 torturadores, entre ellos diversos médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes católicos, protagonistas de esa guerra sucia. ¿Podría imaginarse, me pregunto, que miembros de la iglesia católica como el obispo Raúl Luzzi, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina; el ex obispo de La Plata, Antonio Plaza; el Monseñor Emilio Graselli; el sacerdote Christian Von Wernich; el capellán Pelanda López y el Monseñor Adolfo Tortolo, Vicario de las Fuerzas Armadas, fueron cómplices directos de las torturas, asesinatos y desapariciones de argentinos?

Los escuadrones de la muerte, integrados por miembros del ejército, la policía y la armada, civiles anticomunistas y una amplia gama de pandilleros y delincuentes, agruparon en torno a la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) y el comando "Libertadores de América" a la fuerza debidamente entrenada por la CIA y el FBI norteamericanos para ejercer la represión contra las fuerzas progresistas. El propio general Videla declaró en 1975, sin remordimiento o preocupación alguna, que: "morirán tantos argentinos como sea necesario a fin de preservar el orden".

La Operación Cóndor fue la consumación de los planes norteamericanos para garantizarse un traspatio seguro en la región y representó la internacionalización del terror por parte de los militares latinoamericanos. Sin lugar a dudas, luego de haberse establecido en un encuentro realizado a fines de noviembre de 1975, durante una reunión en Santiago de Chile y bajo la anuencia directa de Pinochet, en la que participaron represores de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se crearon las condiciones organizativas, técnicas y financieras para llevar a cabo operaciones a gran escala, internacionalmente coordinadas, y encaminadas a reprimir de conjunto a las fuerzas progresistas de la región. Los argentinos, al igual que sus socios chilenos, paraguayos y uruguayos, desempeñaron un rol relevante en estos planes.

Los frutos de la nueva estrategia de terror diseñada en la Operación Cóndor no se hicieron esperar: militares argentinos y chilenos ejecutaron el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats y de su esposa. Luego vendría el atentado a Bernardo Leighton, en Roma. Estos hechos evidenciaron que la Operación Cóndor, bendecida por la CIA e integrada también por represores y terroristas de origen cubano, pasó a ser una alianza castrense de tipo internacional, integrada al menos por represores de más de seis países. 1976 representó un año de incremento de las acciones represivas a nivel internacional. Decenas de luchadores progresistas fueron asesinados luego de ser capturados en complejos operativos. En la lista de estos crímenes sobresalen los líderes miristas chilenos Edgardo Enríquez, Patricio Biedma y Jorge Fuentes; dos jóvenes oficiales de seguridad de la embajada cubana en Argentina: Jesús Cejas Arias, de 22 años, y Crescencio Galañega, de 26, quienes habían sido capturados el 9 de agosto de 1976 en el barrio de Belgrano; el ex Presidente de Bolivia, general Juan José Torres; el dirigente del ERP argentino, Mario Roberto Santucho; así como el tupamaro William Whitelaw. Cóndor también provocó el asesinato de los destacados políticos uruguayos Zelmar Michelini y Hector Gutiérrez Ruiz, así como en atentado que costó la vida al ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, perpetrado en territorio norteamericano por terroristas chilenos y cubanos estrechamente vinculados a la CIA.

Ya no es un secreto que 100 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, exilados en Argentina, fueron brutalmente asesinados entre 1974 y 1975, en lo que se llamó Operación Colombo y cuyo artífice fue Pinochet.

Hoy tampoco resulta un secreto que una gran parte de los secuestrados y posteriormente asesinados dentro de la Operación Cóndor, pasaron por una disimulada prisión ubicada en el barrio bonaerense de Floresta, conocida como Automotores Orletti, en la que fueron salvajemente torturados.

De aquella época de dolor y muerte queda aún el reclamo insatisfecho de justicia, el bregar heroico de los argentinos, representados legítimamente por las Madres de la Plaza de Mayo, por alcanzarla un día y, sobre todo, el optimismo de una Argentina mejor. Chile

A partir del golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular, en septiembre de 1973, Chile conoció una época horrenda que arrebató la vida a sus mejores hijos e hizo trizas a las libertades democráticas. Las detenciones, las desapariciones y los asesinatos pasaron a convertirse en la venganza castrense contra todos aquellos que un día pretendieron hacer de Chile una patria igual para todos.

Al baño de sangre que continuó el 11 de septiembre de 1973, le substituyó una feroz represión ejecutada inicialmente por distintos cuerpos de seguridad y, a partir de 1974, por la recién creada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Todo ese despliegue de terror estuvo encaminado a consumir los planes represivos elaborados desde meses antes por los altos mandos militares chilenos, con el apoyo del gobierno norteamericano, y que estaban dirigidos a hacer desaparecer a más de tres mil altos dirigentes de izquierda y 20 mil cuadros de las organizaciones populares luego de la asonada militar. La represalia preelaborada por los golpistas apuntó también contra miembros de las fuerzas armadas opuestos a la sedición castrense.

Hoy se conoce igualmente que la propia Central de Inteligencia de los Estados Unidos colabora con los militares chilenos en la confección de estos listados y que, con posterioridad al golpe, continúa facilitando información a los golpistas sobre exilados chilenos residentes en otros países,

Información que sirvió de base para las operaciones de secuestro y asesinato perpetradas durante la Operación Cóndor. Estados Unidos y sus agencias gubernamentales, apoyándose en un grupo de terroristas cubanos, apuntaló las decenas de operativos realizados por la DINA en otros países latinoamericanos y en varias naciones europeas. Por tanto, no resulta absurdo presuponer que la CIA supervisó todo el proceso de montaje de la asonada golpista en Chile, colaborando con los militares chilenos en el diseño de la ulterior respuesta represiva contra la fuerza de izquierda, lo que incluyó, desde luego, la desaparición física de Salvador Allende.

En los años siguientes, la colaboración entre los Estados Unidos y Pinochet se fortaleció a niveles sorprendentes. El propio Henry Kissinger santificó los asesinatos y la salvaje represión contra los chilenos, cuando le expresó a Augusto Pinochet durante un encuentro que ambos sostuvieron en junio de 1976: "¿en Estados Unidos simpatizamos con lo que usted está tratando de hacer aquí?".

Los cuantiosos recursos aportados por Estados Unidos para llevar a cabo el montaje de la Operación Cóndor incluyeron no sólo altas sumas de dinero, sino también un voluminoso intercambio de información, asesoramiento en técnicas de tortura y equipamiento provistos por la División de Servicios Técnicos de la CIA.

Como se ha destacado en otra parte del artículo, los militares chilenos desempeñaron un papel descollante en la internacionalización del terror contra los movimientos progresistas y sus líderes en América Latina. Fueron operativos de la DINA, una organización de inteligencia subordinada directamente a Pinochet, los que persiguieron, secuestraron y ultimaron a destacadas personalidades democráticas chilenas en el exterior, entre las que sobresalieron el general Carlos Prats y Orlando Letelier.

Durante la investigación llevada a cabo por el FBI sobre el asesinato de Orlando Letelier del Solar, un agente de esta organización federal, Robert Scherrer, quien fungió como agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires desde el año 1972, informó a sus jefes en un cable fechado el 28 de septiembre de 1976: "Operación Cóndor es el nombre en código de la recopilación, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia [militar] sobre personas [calificadas de adversarios políticos], recientemente establecida entre los servicios que a ella cooperan con el fin de eliminar a [sus adversarios políticos] en estos países. Además, la Operación Cóndor lleva a cabo operaciones conjuntas contra sus blancos en los países miembros (...) Chile es el centro de la Operación Cóndor, e incluye también a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Brasil también ha aceptado en principio aportar información a la Operación Cóndor".

Este sistema de terror provocó la desaparición de más de 30 000 personas, mientras que otras fuentes como la OEA, la ONU y el Consejo Mundial de Iglesias y el Parlamento Europeo, señalan como 45 mil los chilenos asesinados entre 1973 al 1990. Estas cuantiosas muertes por razones políticas, se consumaron en la aciaga Caravana de la Muerte, mediante las nefastas operaciones Albania y Colombo, así como los deplorables hechos sucedidos en la Colonia Dignidad, el Buque Escuela Esmeralda y otros. Repudiables fueron también los asesinatos de Bachelet, Víctor Jara, Hoteiza, Pablo Neruda, José Toha, Bonilla, Lumi Videla, Marta Ugarte, Miguel Enriquez y Salvador Allende. Otros terribles hechos de sangre que conmovieron a Chile entero fueron los asesinatos cometidos durante las protestas de pobladores de las colonias José María Caro, la Victoria, la Villa Francia; al igual que las muertes ocurridas en los estadios Chile y Nacional; los crímenes cometidos en Chacabuco, Tejas Verdes y los Buques de Valparaíso y Talcahuano; en Ritoque, Tres y Cuatro Alamos; en la Villa Grimaldi; en Discotex; en el regimiento Tacna, el Buin, el Tarapaca, en el AGA; asesinatos como los de la Academia de guerra de la Fuerza Aérea y de la Armada; los del local del ex diario Clarín y en el sótano del viejo Congreso Nacional, entre otros detestables hechos de sangre cometidos por los militares chilenos. El Salvador

En esta nación centroamericana se cometieron crímenes atroces contra el pueblo y las fuerzas progresistas empeñadas en cambiar el deprimente status quo allí imperante.

El asesinato extrajudicial, la desaparición física y la tortura pasaron a convertirse en práctica rutinaria desde 1932, cuando el régimen de Maximiliano Hernández Martínez hizo desaparecer los cadáveres de las víctimas de sus frecuentes masacres.

Con el apoyo permanente de los Estados Unidos se llevó a cabo a partir de la década de los sesenta una de las más abominables represiones sufridas por pueblo alguno. Prueba del apoyo norteamericano lo representó la enorme ayuda militar recibida por los gobernantes salvadoreños, encaminada a reprimir y enfrentar la legítima lucha de este pueblo por su liberación. Algunos datos prueban que, recién ser elegido Reagan como presidente, entregó al gobierno salvadoreño la asombrosa cifra de \$55 millones en ayuda militar de emergencia.

Hoy se conoce la confabulación de otros gobiernos latinoamericanos para apoyar a los criminales gobernantes de ese país centroamericano. Por ejemplo, la CIA consiguió que el gobierno venezolano de Herrera Campins, perteneciente al COPEI, entregara armas y otros abastecimientos a Napoleón Duarte, probado tátere de Estados Unidos y de la CIA.

Para ocultar vanamente la participación del gobierno y de sus fuerzas armadas en los frecuentes asesinatos de tipo político, en El Salvador fue creado en 1967 un grupo paramilitar conocido como Organización Democrática Nacional (ORDEN), coincidiendo con la aparición de estos escuadrones de la muerte en la vecina Guatemala. Otros grupos paramilitares, dependientes del ejército como la autodenominada Brigada Anti-Comunista "Maximiliano Hernández Martínez" y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), cometieron también abominables crímenes.

El empleo directo de ORDEN por el ejército en 1970 causó tal repudio que, en 1979, fue disuelto en apariencia, aunque continuó realizando macabros crímenes por todo el país con 150.000 civiles armados dentro de su estructura.

ORDEN se mantuvo ejerciendo su represión a pesar de su formal desaparición. Colaboró con el ejército en cuanto a búsqueda de información y aniquilación de potenciales enemigos. Ya para 1985 había participado en la ejecución de más de siete mil salvadoreños. En este contexto se ubicaron los asesinatos de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos acompañantes en 1989, ocurridos en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana. Este hecho, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, tuvo lugar cuando efectivos militares asesinaron a mansalva a los padres jesuitas de la UCA: Ignacio Ellacuría (Rector de la Universidad), Segundo Montes, Ignacio Martínez-Barón, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, al igual que a la trabajadora doméstica Elba Ramos y a su hija de 15 años, Celina Ramos.

Otros terribles crímenes políticos fueron el asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) Víctor Manuel Quintanilla, Santiago Hernández Jiménez (Secretario General del FUSS y desaparecido desde el 25 de septiembre), José Antonio García Viquez y la Dra. Dora Muñoz Castillo, ocurrido el 7 de octubre de 1983, y cuyos autores fueron miembros de la "Brigada Anti-Comunista Maximiliano Hernández Martínez". Un tiempo antes, entre el 1 y 15 de agosto de 1980, fueron asesinados 129 simpatizantes de esta organización al ser reprimido un paro convocado por el FDR. Otros 7 dirigentes del FDR, entre los que se encontraba Álvarez Córdoba, fueron torturados y asesinados.

También fueron asesinadas religiosas norteamericanas y periodistas holandeses.

Gran conmoción causaron las agresiones contra miembros de organismos de derechos humanos como el FENASTAS y COMADRES, así como contra sindicatos de trabajadores. Solo entre enero y junio de 1981 fueron asesinados 136 profesores agrupados en la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES). Por su parte, el día 4 de diciembre de 1981 fue secuestrado y posteriormente asesinado el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES-NG), Carlos Eduardo Vides; en agosto de 1982 ocurrió lo mismo con América Perdomo, Directora de Relaciones Públicas de esa entidad; y, posteriormente, el 16 de marzo de 1983, fue asesinada Marianela García-Villas, Presidente del CDHES-NG, por una patrulla militar.

Las masacres de campesinos por miembros del ejército, como ocurrieron en las aldeas del Mozote, Río Sumpul y El Calabozo, fueron otras de las modalidades del terrorismo de estado en El Salvador. Un grupo de más de doscientos campesinos fue asesinado o desaparecido el 17 de marzo de 1981, cuando un millar de soldados intentaba cruzar el río Lempa, rumbo Honduras. Meses después, en octubre de ese año y en el mismo lugar, fueron asesinados 147 campesinos, entre ellos 44 menores de edad. En noviembre de ese mismo año, una patrulla militar asesinó entre 50 y 100 campesinos en el departamento de Cabañas.

Fueron también miembros del ejército quienes cometieron uno de los más repugnantes y condenados crímenes cometidos en El Salvador: el de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien se había dirigido al presidente norteamericano Jimmy Carter, en 1980, recabando que los Estados Unidos cesara su apoyo al gobierno de su país. El crimen tuvo lugar el 24 de marzo de ese mismo año, mientras oficiaba misa Monseñor Romero en la capilla del hospital La Divina Providencia. El ejecutor directo del crimen fue un francotirador, pero los autores intelectuales fueron varios y había que localizarlos en las altas esferas de gobierno y en Washington. El día anterior, Romero había declarado en su homilía dominical: "En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión."

El acto de horror cometido contra Romero se completó en sus funerales, cuando grupos paramilitares hicieron estallar una bomba entre la multitud que acudió al sepelio, frente a la Catedral de San Salvador. A la detonación, siguió el ametrallamiento de los asistentes. El costo de esta criminal acción fue el de 27 a 40 muertos y más de 200 heridos. Convertidas El Salvador y toda Centroamérica en campo de pruebas de la guerra "antisubversiva" de los Estados Unidos recibieron el apoyo logístico del Pentágono y de la CIA, así como la participación de asesores y expertos en contrainsurgencia, entre los que se destacaron contrarrevolucionarios cubanos como Félix Rodríguez y Luis Posada Carriles. Esta ingerencia provocó la muerte de más de 250 mil centroamericanos.

Hoy se manejan con horror las cifras de asesinados El Salvador. Solo entre los años 1980 y 1982, más de 11 mil fueron asesinados, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

AÑO	TOTAL DE VICTIMAS
1980	11,903
1981	16,266

1982 5,962

Por su parte, la organizaci3n Socorro Jur3dico Cristiano denunci3 que solo entre enero y agosto de 1982, se cometieron 3,059 asesinatos pol3ticos en esa naci3n. El Informe del Enviado Especial a la Comisi3n de DDHH, en su p3gina 21, expresa que solo en el a3o 1982 fueron asesinados 5,962 salvadore3os. El ritmo de asesinatos cometidos fue de 300 por mes. Tal fue la magnitud de este genocidio, cuyo c3mplice principal fue el gobierno de los Estados Unidos. Brasil

Luego de que la CIA desat3 una feroz3 campa3a propagand3stica en contra del gobierno de Jo3o Goulart en 1964, cuya culminaci3n fue un golpe de Estado, Brasil sufrir3-a por m3s de dos d3cadas la presencia de dictaduras militares. Este triste per3odo fue3 iniciado con el mandato del general Humberto de Alencar Castello Branco y cuando3 el pa3s conocer3-a un r3gimen de persecuciones, torturas y asesinatos pol3ticos sin parang3n. Luego del3 breve per3odo presidencial de Artur da Costa e Silva, una Junta Militar detent3 el poder, con el general Emilio Garrastaz3 M3dici a la cabeza. Esta junta castrense llev3 la represi3n a niveles nunca antes conocidos en el pa3s. Luego se suceder3-a el mandato del general Ernesto Beckmann Geisel y, finalmente, el del general Joao Baptista de Oliveira Figueiredo. Con la creaci3n del Servicio Nacional de Informaci3n (SNI), por parte de Castello Branco, las dictaduras castrenses subsiguientes contaron con un eficiente instrumento para llevar a cabo su terrorismo de estado entre 1964 y 1979. Este macabro organismo ten3-a como funciones las de recoger y clasificar la informaci3n sobre supuestos enemigos del gobierno. El SIN coordinaba y maniobraba con3 las secciones de inteligencia de los diferentes cuerpos de seguridad, as3 como con las Divisiones Regionales de Operaciones de Inteligencia y Coordinaciones de la Defensa Interna. De acuerdo con el Informe "Brasil: Nunca M3s", emitido en 1985, se registraron en Brasil3 144 asesinatos pol3ticos, 18 casos de tortura y 125 casos de desaparici3n de personas, tambi3n por los mismos motivos.

Por las investigaciones realizadas para conocer las violaciones a los derechos humanos en ese per3odo, se pudo determinar que los Estados Unidos apoyaron sistem3ticamente a las dictaduras militares, facilitando fondos, entrenamiento y asesor3-a para llevar a cabo sus actividades represivas. El propio oficial CIA Dan Mitrione entren3 a una enorme cantidad de militares y polic3-as brasile3os con sus "M3todos cient3ficos para arrancar confesiones y obtener la verdad". Las v3ctimas con las que se experimentaban estos m3todos de tortura fueron ni3os de la calle y mendigos de la ciudad de Bello Horizonte.

Una pr3ctica muy com3n en este per3odo fue la desaparici3n de ciudadanos, muy difundida ya en otras naciones latinoamericanas. Se conoce hoy que entre 1964 a 1979 ocurrieron 125 casos de personas desaparecidas por razones pol3ticas, las que fueron enterradas bajo otras identidades.

En Brasil, fue donde se estren3, mediante3 el primer golpe de estado, la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada por J. F. Kennedy en 1962, y que posteriormente propiciar3-a la difusi3n de juntas fascistas en gran parte de Am3rica Latina.

Uno de los movimientos sociales que m3s ha padecido el asesinato pol3tico ha sido el3 Movimientos de los Sin Tierra, sobre todos en los estados norte3os brasile3os y en Par3j. Las amenazas de muerte, ejecuciones sumarias y masacres han sido, entre 1985 y 1997, muy frecuentes, al extremo que 1003 campesinos sin tierra fueron asesinados en Brasil. La impunidad de los asesinos es total, ya que solo 56 casos fueron investigados y una peque3a parte3 del total3 fueron juzgados.

Los periodistas tambi3n han padecido la feroz persecuci3n y el asesinato. En el 2004 fueron asesinados en ese pa3s Jorge Louren3o dos Santos (propietario de la radio Criativa FM, Santana do Ipanema, en Alagoas) y Jos3 Carlos Ara3jo (periodista de la Radio Timba3ba FM, Timba3ba, en Pernambuco).

El hecho m3s notorio del terrorismo de Estado en Brasil3 fue3 la masacre de la3 Guerrilla de Araguaia, sobre cuyos miembros se ejerci3 una brutal violencia. De los 69 guerrilleros que la integraban, 59 fueron asesinados y sus cad3veres desaparecidos. Esa valiosa cantera de luchadores del Partido Comunista de Brasil, integrada en lo fundamental por m3dicos, enfermeras, maestras y otros intelectuales, fue hecha desaparecer3 con sa3a y perversi3n. Es cierto que la represi3n en Brasil fue m3s encubierta que en otros pa3ses del continente, pero no por ello menos violenta y condenable. Bolivia

Fueron 18 a3os de dictaduras militares las que sufri3 el pueblo boliviano entre 1965 y 1982. Solo con el golpe militar de Hugo3 Banzer Su3irez, en agosto de 1971, y de acuerdo al Comit3 Impulsor del Juicio contra Garc3-a Meza, se produjeron m3s de 14,000 detenciones ilegales de personas3 las que fueron, en la mayor3-a de los casos, sometidas a crueles torturas y asesinato. La represi3n en esos momentos provoc3 el exilio de 6,000 bolivianos. Con Banzer fueron desaparecidas3 m3s de 70 personas, seg3n cifras bastante conservadoras.

3 Luego del per3odo de Banzer, sobrevino la dictadura de 16 d3-as del coronel Alberto Natusch Busch, breve per3odo en que fueron asesinadas 76 personas en La Paz y3 desaparecieron3 140 bolivianos.

La dictadura de Garc3-a Meza fue responsable de la desaparici3n de 22 personas y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un cuadro de la aterradora represi3n la ofreci3 la Asociaci3n de Familiares de Desaparecidos cuando3 denunci3,3 en mayo de 1990, la desaparici3n de 156 personas. Como ya

señalamos, 76 correspondieron a la etapa banzeriana, 34 al período del general Alfredo Ovando, 28 al de García Meza, 14 al de Alberto Natusch y 4 en el período de René Barrientos.

A los bolivianos recuerdan conmocionados el asesinato del Guerrillero Heroico en octubre de 1967 por indicaciones expresas de la CIA norteamericana. Este fue uno de los crímenes más atroces de los cometidos por los militares bolivianos.

Otros asesinatos políticos que levantaron la repulsa popular y la condena internacional fueron el ya señalado del diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, el de los ocho dirigentes del MOR y el del sacerdote Luis Espinal. La organización de los escuadrones de la muerte fue directamente ordenada y ejecutada por que altos miembros del mismo ejército boliviano, empleándolos para asesinar líderes políticos, cometer atentados terroristas, lanzar bombas contra manifestantes, atacar sedes de organismos políticos, religiosos y culturales, etc. Las macabra conspiración terrorista de los militares bolivianos planeó el asesinato de otras personalidades, incluidas en una lista negra, y en la que se encontraban el sacerdote Luis Espinal Camps, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el ex Presidente Walter Guevara Arce, el líder sindical Juan Lechón Oquendo, y el ex ministro Eduardo Pérez Iribarne, entre otros.

Paraguay

El 4 de mayo de 1954 los militares paraguayos derrocaron al presidente Federico Chávez, de la Asociación Nacional Republicana, mediante un golpe de estado. Este hecho incruento llevó al poder al general Alfredo Stroessner, quien lo detentó por 35 largos años. Época macabra en la que el terror reinó a sus anchas, provocando la muerte indiscriminada de miles de personas, tanto paraguayos como de otras naciones del Cono Sur.

La anuencia de Estados Unidos hacia los crímenes de la dictadura paraguaya, se puso de manifiesto cuando el propio presidente norteamericano Richard Nixon le manifestó a Stroessner durante una visita a ese país, realizada el 4 de mayo de 1968: "En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo".

La Operación Cóndor tuvo en Asunción la sede de los archivos del terror. Los militares paraguayos fueron artífices de desapariciones de ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos y de otras nacionalidades, los que eran secuestrados y enviados hacia sus respectivos países para ser inmediatamente torturados y asesinados. En pago por estos favores, los militares argentinos, por ejemplo, asesinaron a 54 paraguayos exilados en ese país. Investigaciones posteriores han indicado que los militares paraguayos se incorporaron a las actividades de Cóndor a partir de julio de 1976, a través del Coronel Benito Guanes Serrano, jefe de los Servicios de Inteligencia del Ejército.

Tal fue el nivel de represión desatada por Stroessner, que 360 mil personas, de un total de tres millones de habitantes, pasaron por las prisiones, siendo salvajemente vejadas y torturadas. Por otra parte, casi el 50 % de los paraguayos tuvieron que exilarse para escapar de la represión.

El descubrimiento de los llamados Archivos del terror, aparecidos casualmente en la estación de policía de Lambaré, un barrio de Asunción, ofreció en 1993 la documentación suficiente para demostrar cómo funcionó el aparato de pavor implementado por los militares paraguayos en complicidad con sus iguales en otros países del Cono Sur. Las desapariciones forzadas aparecieron en su real magnitud y se pudo descubrir el fatal destino de miles de personas de diversos países, esbozando el método principal de control político y social en Paraguay, basado en la impunidad y la violación descarada de los derechos humanos. Los Archivos del terror contienen registros documentales sobre de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados. Lo pavoroso es que 3000 niños fueron desaparecidos y asesinados durante la Operación Cóndor.

Casos como el Gustavo Edison Inzaurrealde, quien en 1973 huyó a Paraguay tras ser detenido y torturado por sus actividades revolucionarias en Uruguay, arrestado el 28 de marzo de 1977 y posteriormente asesinado por militares argentinos, ilustran la criminal madeja desenterrada por Martín Almada al descubrir los Archivos del terror. Junto con Inzaurrealde, fueron entregados a los torturados argentinos el uruguayo Nelson Rodolfo Santana y otros tres ciudadanos argentinos.

Otro sonado caso de colaboración de los militares paraguayos con sus homólogos del Cono Sur fue el Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, arrestado por la policía paraguaya al cruzar la frontera desde Argentina. Entregado a los agentes de la DINA, fue enviado a Santiago de Chile, donde desapareció en Villa Grimaldi. A Fuentes Alarcón lo interrogaron torturadores de varios países, incluso norteamericanos adscritos a la embajada yanqui en Argentina.

Los sicarios paraguayos asesinaron a los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez, acusados de pertenecer a un grupo guerrillero conocido como Organización Política Militar. El propio jefe de investigaciones de la policía paraguaya, Pastor Coronel, participó en estos asesinatos y en el del doctor Agustín Goyburó, dirigente del Movimiento Popular Colorado de Paraguay.

Otras cinco personas arrestadas en Paraguay fueron entregadas a funcionarios de las inteligencias de Argentina y Uruguay. Ellos fueron los uruguayos Gustavo Edison Inzaurrealde y Nelson Rodolfo Santana Scotti, y los argentinos Alejandro Logoluso Dio Martino, José Boll y Dora Landi Gill, quienes luego desaparecieron, y cuyo caso ya mencionamos con anterioridad. El pueblo paraguayo aún reclama justicia por estos crímenes.

Uruguay

La dictadura cívico-militar que desgobernó al Uruguay entre 1973 y 1984, desató también una represión a gran escala, pero con una modalidad muy sui generis: fue una represión sofisticada y selectiva.

Los militares y el gobierno clasificaron a los ciudadanos del país en tres categorías (A, B y C), en correspondencia con el grado de peligrosidad que les suponía. Mediante un "Certificado de Fe Democrática" se regulaba el destino de

cada uruguayo y su propia suerte. A

La ideología dominante en los círculos de poder uruguayos, la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), abarcó tanto la estructura orgánica del país como su dependencia al control de los militares. Convertida en filosofía reinante, esta doctrina dominó la vida pública del país.

La actividad solapada y selectiva de los torturadores uruguayos, provocó sin embargo crímenes condenables como el de los 8 militantes del Partido Comunista, perpetrado en abril de 1972. Otro hecho siniestro fue el secuestro en Buenos Aires de cinco ciudadanos uruguayos y su ulterior asesinato en 1975, ya en Uruguay.

Gran repudio causaron los asesinatos de dos legisladores uruguayos en 1976: Zelmario Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en unión de William Whithelaw Blanco y Rosario Barredo. Otro hecho repudiable fue el envenenamiento de Celia Fontana de Heber, esposa de un dirigente político uruguayo.

La dictadura cívico-militar ocultó estos hechos y su complicidad en ellos. Hubo, sin embargo, un hecho en que se vieron desnudados como fue el caso de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en junio de 1976 en el propio predio de la embajada de Venezuela en Uruguay.

El asesinato del maestro y pedagogo Julio Castro, secuestrado en plena vía pública y luego asesinado, también causó gran conmoción en todo el país.

Ese trágico año de 1976 vio con impotencia cómo, dentro del marco de la Operación Cóndor, fueron secuestrados en la Argentina 62 uruguayos y conducidos posteriormente a su país, donde fueron salvajemente torturados y la mayoría de ellos desaparecidos.

El caso más sorprendente de la represión en Uruguay lo fue la desaparición del niño Simón Antonio Riquelme, quien fue arrebatado de los brazos de su madre cuando sólo tenía 20 días de nacido.

Entre 1977 y 1979 continuaron los secuestros y desapariciones de uruguayos en Argentina. En Paraguay capturaron y desaparecieron a dos ciudadanos uruguayos, los que fueron trasladados a Argentina y posteriormente ultimados.

En Uruguay, la CIA fue la responsable y tutora directa de los escuadrones de la muerte. La estación de la CIA en Montevideo elaboró listados y ejerció permanente control sobre los más destacados activistas y opositores al gobierno de turno. Fue la CIA la que facilitó las coordinaciones entre los militares uruguayos y sus similares de Chile y Argentina, dando lugar a las ya analizadas operaciones conjugadas entre ellos que estaban previstas en la Operación Cóndor. Como ejemplo, puede destacarse que un numeroso grupo de 32 uruguayos y argentinos, detenidos en la cárcel secreta de "Automotoras Orletti", fue enviado al Uruguay en octubre de 1976 y allí posteriormente ultimados. Tal fue la confabulación de los militares y grupos civiles de poder, asociados con militares del Cono Sur y contando con la venia y apoyo de los Estados Unidos. Prueba de ello fue que, en 1969, la agencia envió a Uruguay al conocido torturador Dan Mitrione.

Guatemala

A partir de 1962 se fortaleció aún más el proceso de militarización del Estado y, en consecuencia, un incremento de la violación de los derechos humanos. Ya habían ocurrido las Jornadas de marzo-abril de 1962 cuando el estudiantado y otros sectores de la población protestaron por la represión que provocó la muerte a tres estudiantes de Derecho. Como resultado de la represión fueron muertas 50 personas, 500 fueron heridas y más de mil detenidas. La imposibilidad de Miguel Ydigoras Fuentes de controlar el descontento popular, provocó que el ejército se hiciera cargo de la situación, preparándose de facto las condiciones para el golpe militar de 1963.

Ese era la forma en que los militares guatemaltecos y los grupos de poder interpretaron la Doctrina de Seguridad Nacional, concebida por Estados Unidos para su traspaso latinoamericano.

Con el golpe de Estado producido el 30 de marzo 1963, los militares guatemaltecos hacían suya esta doctrina, la que lograron aún más plenitud durante el período gubernamental de Julio César Méndez Montenegro, ejercido entre 1966 y 1970. Al estilo de sus homólogos uruguayos, un pacto entre militares y civiles beatificó a este nuevo modelo de contrainsurgencia. El golpe, que colocó a la cabeza del régimen a Enrique Peralta Azurdia, hasta ese momento ministro de la Defensa, durante mil días de terror y represión contra las fuerzas progresistas del país.

Apoyados por Estados Unidos, los militares incorporaron el despliegue de un terror a gran escala como modalidad de su estrategia contrainsurgente. La CIA y el Pentágono ayudaron a perfeccionar los órganos represivos guatemaltecos y a preparar a sus miembros con las últimas técnicas de tortura y represión. A la acelerada modernización del ejército, la difusión de la Doctrina de Seguridad Nacional, el perfeccionamiento de los servicios de inteligencia militar y el incremento de la ayuda militar norteamericana, dio paso un modelo contrainsurgente basado en el terror. Todo ese tinglado de abusos y violación de la democracia, se beatificó con leyes como la llamada Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, el decreto 9, de abierto carácter antidemocrático.

En marzo de 1966, se decidió el traspaso del gobierno al abogado Julio César Méndez Montenegro. Para evidenciar que este cambio era solo de forma y que la represión continuaría, fueron capturados y desaparecidos 28 dirigentes políticos y populares. Luego se esclareció que habían sido capturados por órdenes del entonces ministro de la defensa, el coronel Rafael Arriaga Bosque. Sus cuerpos jamás aparecieron, pues fueron salvajemente torturados y arrojados al mar desde aviones de la Fuerza Aérea. Con la desaparición de los 28 se daba paso a una práctica que se haría común en Latinoamérica.

La complicidad norteamericana quedó esclarecida cuando se comprobó que asesores yanquis participaron en los interrogatorios.

En ese mismo año aparecieron los "escuadrones de la muerte", alcanzando la alarmante cifra de 15 grupos de este tipo creados en un solo año. Luego aparecerán otras 20 organizaciones paramilitares para ejecutar los crímenes contra los opositores al gobierno. Los crímenes cometidos entre 1966 y 1970 provocaron más de 3 000 víctimas.

El modelo represivo ensayado en Guatemala, apoyado en la asociación entre políticos, empresarios y militares, se extendió a la década de los setenta. El dominio del ejército sobre la vida pública, manejando todos los hilos del poder, limitó al máximo la participación de los partidos de derecha. A

Los gobiernos militares que sucedieron a los de Montenegro, el del coronel Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) y del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978), mantuvieron una brutal represión: El abogado Julio Camey Herrera fue ametrallado el 26 de noviembre de 1970. Dos meses después fue ultimado el diputado Adolfo Mijangos López. A

La persecución de los comunistas provocó la captura y muerte, el 26 de septiembre de 1972, de seis miembros del Buró Político del PGT y la de una trabajadora doméstica que se encontraba en el lugar. Luego, en 1974, resultó vilmente asesinado el secretario general del PGT, Huberto Alvarado, y, posteriormente, en 1976, otro destacado líder comunista: Bernardo Alvarado Monzón.

La represión selectiva recurrió al aumento del número de escuadrones de la muerte, a los que se incorporan el Ojo por Ojo y la Organización CERO. Fue precisamente Ojo por Ojo la ejecutora del ex diputado del PGT César Montenegro Paniagua, en abril de 1970.

Otro caso de asesinato selectivo fue el perpetrado el 8 de junio de 1977 contra el abogado laborista Mario López Larrave, ex decano de la Facultad de Derecho y miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC). Por esa misma razón, el 30 de junio de 1978, día en que finalizaba el gobierno de Kjell Eugenio Laugerud, resultó muerto el sacerdote Hermágenes López Coarchita, párroco de San José Pinula.

Los campesinos también sufrieron una feroz represión en la década de los setenta. Prueba de ello lo fue el ataque contra una manifestación campesina en Panzós, Alta Verapaz, en mayo de 1978, siendo asesinados 53 campesinos de la etnia k'iche' y más de 40 resultaron heridos. Otro golpe contra el campesinado resultó el asesinato de Tereso de Jesús Oliva, secretario general del Movimiento Campesino Independiente, el 20 de enero de 1971. En el departamento de El Quiché fueron asesinados, entre febrero de 1976 y noviembre de 1977, 68 líderes de cooperativas del Ixcán, cerca de 40 en Chajul; 28 más en Cotzal y 32 en Nebaj. A

Los trabajadores de la ciudad también sufrieron en carne propia el asesinato de sus dirigentes. Así sucedió con Vicente Mérida Mendoza y César Enrique Morataya, líderes de los trabajadores en la Empresa Autobuses Alianza Capitalina y Compañía Industrial del Atlántico S.A. (CIDASA), respectivamente, en 1972. A

La represión selectiva también cobró la vida de Mario Mujía-Cárdenas, principal asesor de los mineros de Ixtahuacán, el 20 de julio de 1978.

En los últimos años de la década de los setenta fueron ultimados sin piedad doce dirigentes sindicales y trabajadores, entre los que se hallaban tres secretarios generales: Pedro Quevedo y Quevedo, Manuel Francisco López Balam y Marlon Rodolfo Mendizábal.

Los Gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt representaron un aumento en la escalada terrorista contra el pueblo guatemalteco. Su estrategia contrainsurgente se encaminó a destruir al movimiento social, tanto en las ciudades como en el campo, implementando una estrategia de tierra arrasada. Cientos de aldeas fueron quemadas y sus moradores asesinados y perseguidos, provocando el desplazamiento masivo de la población. Fue la época de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), empleadas como soporte de los militares para controlar a los más a la población y evitar su apoyo a la insurgencia. A

El gobierno del general Humberto Mejía-Céspedes (1983-85) dio continuidad a tal modelo represivo. A

En los años ochenta fueron asesinados centenares de jueces y abogados, supeditando al poder judicial mediante el terror.

Las protestas de octubre de 1978, por el aumento del pasaje del transporte público, fueron reprimidos salvajemente los ciudadanos de la Capital, provocándose la muerte de 40 personas, 300 heridos y más de 1500 detenidos.

Uno de los destacados líderes estudiantiles, Oliverio Castañeda León, Secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios, fue asesinado ese mismo mes. No sería el único: partir de 1977, más de cien estudiantes y profesores de la USAC fueron asesinados por militares y escuadrones de la muerte.

El Frente Unido de la Revolución (FUR), padeció la muerte de su líder, Manuel Colom Argueta y, entre 1978 y 1981, otros 19 dirigentes de esa organización fueron ultimados por escuadrones de la muerte.

Tal vez el hecho que causó mayor repercusión internacional lo fue la masacre de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, cuando fue incendiada la misma por fuerzas militares, muriendo 37 de sus ocupantes. El único sobreviviente de los campesinos, fue asesinado luego de ser secuestrado del hospital en que encontraba convaleciente.

El Primero de mayo de 1980 fueron secuestrados 32 participantes de las protestas de ese día y luego aparecieron los cadáveres de 28 de ellos.

La sucesión de gobiernos como el de Vinicio Cerezo Arévalo, de Serrano Elías (1991-1993), Ramiro De León Carpio (1993-95) y de Álvaro Arzú Irigoyen, no terminaron con la represión. Guatemala ha sufrido, por tanto, dolorosas páginas de horror, implementadas por los militares y sus cómplices en Washington. Este cuadro de terror provocó la muerte de 45 000 guatemaltecos y la desaparición de cerca de 150 000.

A Otros crímenes políticos.

La historia de nuestro continente ha sido dolorosa y la principal causa de este cuadro de horror, basado en la desaparición física, las masacres, la tortura y el asesinato selectivo, han sido las apetencias geopolíticas de Estados Unidos para la región. Muchos líderes políticos han sido salvajemente asesinados y otros han muerto en oscuras circunstancias, tal como ocurrió con Maurice Bishop, Jacobo Arbenz, Luis Augusto Turcios Lima y algunos más. A otros, como Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, todavía se les pretende asesinar día a día, por órdenes expresas

cursadas desde Washington.

Resultar a extenso realizar un detallado an lisis de todos los casos de asesinato pol tico o de aquellas muertes sospechosas ocurridas a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, existieron asesinatos y muertes sospechosas que vale la pena examinarse. Tales son los casos del asesinato de C sar Augusto Sandino, en Nicaragua; de Jorge Eli cer Gait n, en Colombia; de Jaime Rold s, en Ecuador; y de Omar Torrijos, en Panam .

La muerte de Sandino. El deseo de Sandino de conseguir una paz duradera y una Nicaragua independiente, lo condujo a aceptar una entrevista con Somoza el 21 de febrero de 1934. Una vez que sali  de la Casa Presidencial en compa a de Gregorio Sandino, el ministro Sofon as Salvatierra, as  como los generales Estrada y Umanzor, fueron detenidos por un destacamento de guardias nacionales que les conmin  a bajarse del veh culo. Luego, fueron desarmados irrespetuosamente. Separado Sandino de sus acompa antes, se le asesin  cobardemente. "Est n matando a Augusto", atin  a decir el anciano don Gregorio con total impotencia. Los autores intelectuales del crimen fueron Anastasio Somoza y los intereses norteamericanos en Nicaragua.

La muerte de Gait n. Jorge Eli cer Gait n, nacido en Bogot , el 23 de enero de 1903 y asesinado el 9 de abril de 1948, fue un pol tico y abogado colombiano, alcalde y popular candidato del Partido Liberal a la Presidencia de la Rep blica.

  Qui n orden  el asesinato de Jorge Eli cer Gait n? Aunque la autor a de su muerte ronda en el m is absoluto misterio, se sabe que det s de la mano asesina de Juan Roa Sierra estuvo tambi n la mano de la CIA y la de los intereses de la Federaci n Nacional de Cafeteros y los nacientes industriales.

Las sospechas recayeron igualmente en el presidente Mariano Ospina P rez, de quien se dice se comunic  en secreto con el autor material del crimen antes de que el crimen sucediera. El hecho de que Juan Roa fuera asesinado momentos despu s que cometi  el magnicidio, al igual que ocurri  despu s con el supuesto asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, refuerzan hoy la sospecha de la participaci n de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana en el crimen. Ser a, sin lugar a dudas, uno de sus primeros asesinatos promovidos en Am rica Latina por la CIA, luego de que  sta fuera creada por Harry Truman, el 26 de julio de 1947. La CIA empez  a funcionar el 20 de septiembre de ese mismo a o y ha sido la punta de lanza de los Estados Unidos para desestabilizar gobiernos y asesinar dirigentes en todo el mundo.

Jorge Eli cer Gait n se hab a hecho popular con un programa a favor de la restauraci n moral de la rep blica, cr tica a la violencia y la vindicaci n de los pobres en el pa s. Se tiene conocimiento que, el autor material del magnicidio, se hab a entrevistado poco tiempo antes del acontecimiento con el presidente Ospina P rez, por lo cual muchos liberales acusaron al gobierno y exig an la renuncia de  ste, como ya comentamos.

La muerte de Jaime Rold s: El de mayo 24 de 1981 ocurri  el sospechoso accidente a reo que cost  la vida al presidente ecuatoriano Jaime Rold s, a su esposa y a los miembros de su comitiva. De inmediato, voces acusadoras se alaron hacia la CIA por cuanto Estados Unidos ten a motivos suficientes para desear su desaparici n f sica. Su enfrentamiento a las compa as petroleras norteamericanas, su suspensi n a las actividades del Instituto Ling stico de Verano, fachada de oscuros intereses, lo colocaron en la mira de Estados Unidos.

Su fuerte posici n nacionalista y su defensa a la Ley Pol tica de Hidrocarburos, en la que expresa el inter s de que los beneficios del petr leo fueran disfrutados por la mayor a de los ecuatorianos, lo llev  a la muerte. Antes de su defunci n, hab a proclamado: "nosotros debemos tomar medidas efectivas para defender los recursos energ ticos la naci n. El Estado debe mantener la diversificaci n de sus exportaciones y no perder su independencia econ mica. (...) Nuestra decisi n ser  inspirada solamente por los intereses nacionales y la irrestricta defensa de nuestra soberan a nacional".

La respuesta de las transnacionales petroleras no se hizo esperar. Una fuerte campa a ideol gica contra Rold s se desat  e invirtieron altas sumas de dinero para comprar voluntades, sobornar funcionarios y obstaculizar el desempe o de su gobierno. De hecho, ese dinero pag  la mano de sus asesinos.

La muerte de Omar Torrijos. El 31 de julio de 1981 ocurri  el fatal y sospechoso accidente a reo que cost  la vida al general Torrijos, en las inmediaciones de Cerro Marta, en Panam .

Varias destacadas personalidades han acusado a la CIA de haber interferido desde tierra los instrumentos de la nave donde viajaba Torrijos.

Su fuerte posici n nacionalista con respecto a renegociar el tratado canalero con Estados Unidos, as  como la decisi n de expulsar de Panam , al igual que lo hizo Rold s, al Instituto Ling stico de Verano, lo colocaron tambi n en la mira de los asesinos pagados por Washington.

Conclusiones

Los asesinatos pol ticos cometidos en Am rica Latina, estimulados y financiados por el gobierno norteamericano y sus agencias, fruto de sus apetencias geopol ticas, han constituido un fen meno sistem tico en nuestro continente. Tales actos constituyen violaciones de normas jur dicas internacionales tales como la Declaraci n Universal de los Derechos Humanos de la Organizaci n de las Naciones Unidas. Ella establece que la desaparici n forzada de personas y los asesinatos pol ticos constituyen delitos permanentes que violan todo un grupo de normas que protegen a los derechos humanos.

De hecho, tales abominables pr cticas ejecutadas por los gobiernos terroristas en Am rica Latina, dentro del marco de la Operaci n C ndor y de la lucha contra las fuerzas progresistas, violaron impunemente los art culos 3, 5, 8, 9 y 10 de la referida Declaraci n Universal, en los que se consagran los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personales.

De la misma manera, los reg menes militares que detentaron el poder en Latinoam rica y sus c mplices de la Casa Blanca, violaron los art culos Primero, Segundo, Doceavo, Treceavo y Catorceavo, de la Convenci n Contra la Tortura

y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos y Degradantes. Asimismo, fueron violados por ellos los artículos Noveno y Décimo. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos hechos ocurridos ampliamente en nuestros países latinoamericanos, fueron violatorios también del Código de Conducta Para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, previsto en una declaración de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, en las normas 5a. y 6a.

Estos gobiernos represores violaron también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue firmada y ratificada en 1969 por la mayoría de los miembros de la OEA.

De qué sirven las palabras del Artículo 4 de la misma, en las se dice que: "• Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.", cuando los propios gobiernos firmantes han sido los comisores de los delitos de asesinato extrajudicial, desapariciones físicas y torturas degradantes!?

Mucho ha faltado por decirse sobre el crimen cometido contra nuestros pueblos y sobre el asesinato de sus mejores hijos, pero razones de espacio y la tanta vergüenza y rabia que se experimentan, conspiran contra el autor.

Tal vez el hecho más relevante de esta época trágica de nuestra historia, actualizada recientemente con el asesinato del luchador independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda por sicarios del FBI norteamericano, lo ha sido que tanto crimen y tamaña matanza solo ha servido para reforzar la lucha de los pueblos por su definitiva liberación, quienes ven en sus hijos desaparecidos nuevas banderas de lucha y acicates para continuar batallando por el porvenir.